

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Auto Interlocutorio No. 252.

MEDIO DE CONTROL	REPETICIÓN
DEMANDANTE	NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
DEMANDADO	GUSTAVO GIRALDO VICTORIA
RADICADO	76001-33-33-001-2019-00185-00

I. ASUNTO A DECIDIR

Mediante auto de 18 de febrero de 2021, en aplicación del artículo 36 de la ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 175 del CPACA, se negaron las excepciones previas formuladas por el señor GUSTAVO GIRALDO VICTORIA en su condición de parte accionada.

Por medio de memorial presentado dentro del término de ejecutoria de la providencia el 23 febrero de 2021 la parte accionada formuló recurso de apelación en contra del auto que negó las excepciones previas con fundamento en lo dispuesto en el inciso final del artículo 12¹ del Decreto 806 de 2020 el cual establece que en contra de la decisión que “*resuelva las excepciones mencionadas*” procede el recurso de apelación.

Teniendo en cuenta que en el presente caso la providencia que resolvió sobre las excepciones previas formuladas por la parte accionada se profirió en vigencia de las modificaciones efectuadas por la ley 2080 de 2021 se establecerá el régimen legal aplicable al recurso formulado para luego establecer su procedencia en el marco procesal vigente.

II-. CONSIDERACIONES.

1. Régimen de entrada en vigencia de la ley 2080 de 2021.

¹ (...) La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez, subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable. (...)

Con la entrada en vigencia de la ley **2080 de 2021** se introdujeron modificaciones en el proceso contencioso administrativo que afectan el trámite de las excepciones previas y que conllevan a que su resolución se efectúe con anterioridad a la realización de la audiencia inicial.

La Jurisprudencia del Consejo de Estado² al referirse a la entrada en vigencia de la ley procesal señala que *“la misma resulta de aplicación inmediata y prevalece sobre las anteriores, a partir de su entrada en vigencia o de la fecha de su promulgación, conforme lo establece el artículo 40 de la Ley 153 de 15 de agosto de 1887, el cual prevé que “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir”.*

A su turno el artículo 86 de la ley 2080 de 2021 estableció su régimen de entrada en vigencia bajo los siguientes lineamientos:

(...) ARTÍCULO 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, e aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones. (...) Subrayado por el Despacho.

En este contexto, frente al trámite de las excepciones previas, el artículo 36 de la ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 175 del CPACA en su parágrafo 2 consagra lo siguiente:

(....) PARÁGRAFO 2º. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

² CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018) CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ REF: Expediente núm. 66001-23-33-000-2017-00474-01.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A. (...)

Con base en los anteriores parámetros, atendiendo los postulados del principio de aplicación inmediata de la ley procesal se tiene que en el presente caso aunque el término de traslado de las excepciones se surtió entre el 15 y 19 de octubre de 2020 en vigencia del Decreto 806 de 2020, al momento de proferirse la decisión que resolvió las excepciones previas presentadas con la contestación de la demanda ya surtían efectos las modificaciones introducidas por la ley 2080 de 2021 la cual entró en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial N° 51568 el 25 de enero de 2021³.

En efecto, a la fecha de expedición de la providencia recurrida ya se habían surtido los términos de traslado de la demanda y de las excepciones presentadas en su contestación, motivo por el cual no resulta aplicable el régimen de transición previsto en el inciso final del artículo 86 de la ley 2080 de 2021, el cual permite la aplicación de la ley anterior⁴ para resolver cuestiones procesales que se encontraban en curso al momento de entrada en vigencia de a nueva normatividad.

2. Providencias objeto del recurso de apelación en el marco de las modificaciones introducidas por la ley 2080 de 2021.

Conforme a lo estipulado por el numeral 1 del artículo 243 del CPACA modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021 el recurso de apelación procede frente a las siguientes providencias dictadas en el marco del proceso contencioso administrativo:

(...) ARTÍCULO 243. APELACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.
2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.
4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.
5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.
6. El que niegue la intervención de terceros.

³ <http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml?jsessionid=1ac756a20a7697307dea56153660>

⁴ En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones

7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.

8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial. (...)

Del contenido de la norma transcrita se infiere dentro del listado de providencias susceptibles del recurso de apelación no se incluyó el auto que niega las excepciones previas.

Adicionalmente, se advierte que en el trámite previsto para este tipo de excepciones contemplado en el parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA, el cual fue introducido en la modificación efectuada por el artículo 36 de la ley 2080 de 2021, tampoco se estableció a la providencia que niega las excepciones previas como susceptible del recurso de apelación.

En consecuencia, se infiere que a diferencia del artículo 12 del Decreto 806 de 2020, la normatividad vigente al momento de proferirse la providencia recurrida no contempló la posibilidad de controvertirla mediante el recurso de apelación.

Ahora bien, el artículo 242⁵ del CPACA establece que el recurso de reposición procede contra la totalidad de autos que se profieran en el curso del proceso salvo norma legal en contrario.

Teniendo en cuenta el anterior precepto y que el auto que niega las excepciones previas no se encuentra previsto en el artículo 243A del CPACA dentro de las providencias que no son susceptibles de recursos ordinarios, en aplicación de lo consagrado en el parágrafo de artículo 318⁶ del Código General del Proceso se adecuará el recurso de apelación formulado por el señor GUSTAVO GIRALDO VICTORIA al de reposición.

3. caso concreto.

En el recurso objeto de análisis, la parte accionada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda frente a la configuración de la excepción previa de inepta demanda pues a su juicio las pretensiones formuladas por la Policía Nacional no cumplen con la exigencia establecida en el artículo 163 del CPACA, de acuerdo a la cual, lo pretendido con la demanda se debe determinar de forma clara y separada.

En efecto, en el caso concreto, en la segunda pretensión de la demanda se solicitó que *“se condene a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional a la totalidad de dineros pagos por mi representada”*.

A juicio de la parte recurrente la irregularidad transcrita implica una incongruencia entre la demanda y sus pretensiones ya que mientras en el resto del memorial se pretende que se declare como responsable al señor GUSTAVO GIRALDO

⁵ (...) El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso. (...)

⁶ (...) **Parágrafo.** Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente. (...)

VICTORIA en la pretensión N° 2 se solicita que se condene a la propia entidad accionante.

En este contexto, la parte recurrente señala que en la sentencia T – 873 de 2001 la Corte Constitucional señaló que el proceso contencioso administrativo sólo puede ser iniciado por demanda de parte y es una carga procesal expresar con claridad y precisión las partes, las pretensiones y sus fundamentos de hecho.

De acuerdo a la jurisprudencia Constitucional, el cumplimiento de la carga procesal enunciada es determinante para la estructura del proceso, toda vez que determina el marco de controversia.

Así las cosas, la parte recurrente considera que omitir el yerro existente en la pretensión N° 2 de la demanda implica suponer lo que la parte accionante pretende y por ende que el fondo del asunto se resuelva como consecuencia del ejercicio de unas facultades *ultra y extra petita* que no ostenta el Juez de lo contencioso administrativo.

3.1. El Despacho negará el recurso formulado con base en los argumentos que se expondrán a continuación:

Para fundamentar la decisión de negar la excepción de inepta demanda, en la providencia impugnada, el Despacho trajo a colación el precedente estructurado por la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante auto de 16 de octubre 2020⁷ en el cual se estableció lo siguiente:

(...) Inepta demanda

Gloria Lucía Álvarez Pinzón formuló excepción de inepta demanda, alegando que la demanda se refiere a la causal No. 4 del artículo 6 de la ley 678 de 2001, atinente a la responsabilidad del funcionario por privación injusta de la libertad, normativa que resulta “abiertamente impertinente e improcedente”.

Fundamentos para resolver

La jurisprudencia de esta Corporación⁸ ha precisado que, la demanda es el instrumento mediante el que se ejercita el derecho de acción, es decir, que inicia el proceso judicial para obtener la resolución de las pretensiones que formula el demandante. Considerando entonces, la importancia que tiene la demanda como mecanismo introductorio del proceso judicial, es preciso tener en cuenta que la normatividad ha establecido diversos requisitos para el cumplimiento del presupuesto procesal denominado “demanda en forma”.

De acuerdo con esto, no cualquier escrito denominado demanda pone en funcionamiento la jurisdicción, pues debe cumplir con los requisitos dispuestos por la normatividad para estructurar la demanda en debida forma. Es así como el CPACA reguló su contenido mínimo en los artículos 162 a 166 y, por tanto, para estructurarla de conformidad con las normas legales, es necesario acudir, únicamente, a lo establecido en esas disposiciones.

El artículo 142 del CPACA dispone un requisito adicional a los anteriores, y de esa forma ejercer la pretensión autónoma de repetición, el certificado expedido por la persona calificada, que certifique el pago realizado por la entidad demandante:

⁷ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Bogotá, D.C, dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-26-000-2015-00003-00(53025)A

⁸ Consejo de Estado. Sentencia del 28 de enero de 2015. Exp: 26.408.

“Artículo 142. Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.

La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.

Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.”

De acuerdo con lo anterior, es preciso considerar que la inepta demanda se configura, exclusivamente, cuando falta alguno de los presupuestos expresados, es decir cuando no se cumple con lo prescrito en los artículos mencionados⁹. (...)

(...) En consideración a lo anterior no se configura la excepción de inepta demanda, debido a que en ella se especificó en concreto el motivo a demandar en sede de repetición y se individualizaron las pretensiones en debida forma. (...)

Conforme a dicho parámetro, para el caso de la acción de repetición, la inepta demanda se configura únicamente cuando falta alguno de los presupuestos consagrados en los artículos 162 a 166 y 142 del CPACA.

En este contexto, en el caso concreto resuelto por el Consejo de Estado se concluyó que el error formal cometido en la demanda consistente en una indebida enunciación de la norma utilizada como fundamento de derecho para la procedencia de la acción de repetición no era suficiente para declarar probada la excepción de inepta demanda, toda vez que una interpretación sistemática del escrito permitía establecer una imputación de responsabilidad personal que se resolvería al momento de definir el fondo del asunto. Así se señaló en la ya citada providencia de 16 de octubre 2020:

(...) Ahora bien, en cuanto al argumento de la accionada, basado en que el libelo se refiere a la causal No. 4 del artículo 6 de la ley 678 de 2001, se pudo establecer que en el hecho noveno se manifestó en extenso la existencia de dolo o culpa grave, precisando que la mencionada agente del Estado NO incurrió en ninguna de las causales de dolo pero que SI actuó con culpa grave, y señaló todas las causales indicadas en el artículo 6º de la Ley 678 de 2001, resaltando con negrilla la No. 1.- “Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”. Ahora bien, más adelante vuelve a transcribir las mismas causales subrayando la causal 1º y 4º ibidem.

Como argumento sustancial del caso, en la demanda se precisó que la funcionaria demandada expidió actos administrativos contrarios al ordenamiento legal, al no respetar las normas sobre la situación administrativa de la renuncia de la afectada, lo relacionado con el tema de la supresión del cargo y la reubicación de la funcionaria Toro Suárez, lo que constituyó en una culpa grave que da sustento al medio de control.

Como puede apreciarse, el asunto así propuesto por la accionada guarda relación con el fondo de la litis y constituye materia del pronunciamiento de la misma naturaleza, que decidirá si la demandada actuó con culpa o no para el caso que nos ocupa, situación que se decidirá en el fondo del asunto y no en esta oportunidad, motivo por el que no prospera la excepción de inepta demanda, propuesta por la accionada. (...)

Conforme a los apartes transcritos se advierte que los argumentos expuestos por la parte recurrente son insuficientes para controvertir la subregla jurisprudencial

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 3 de diciembre de 2014.rad. 28833.

establecida en el precedente del Consejo de Estado y que fue aplicada para resolver la excepción de inepta demanda.

Una interpretación sistemática permite establecer de forma clara los hechos que sustentaron el ejercicio del derecho de acción y los motivos existentes para perseguir la declaratoria de responsabilidad del accionado. En consecuencia, se infiere que el yerro cometido en la formulación de la pretensión N° 2 corresponde a un error de digitación y no a una irregularidad que tenga el mérito para afectar la estructura de la demanda.

En efecto, una valoración conjunta de los hechos y argumentos expuestos en la demanda evidencian que se pretende la condena del señor GUSTAVO GIRALDO VICTORIA y no la declaratoria de responsabilidad de la propia entidad accionante, situación que desvirtúa los argumentos expuestos por el recurrente sobre la configuración de un fallo “*ultra o extra petita*”.

En conclusión, se negará el recurso formulado por la parte accionada.

En consecuencia, el **Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ADECUAR¹⁰ el recurso de apelación formulado por el señor GUSTAVO GIRALDO VICTORIA en contra del auto de 18 de febrero de 2021 al de reposición por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NO REPONER PARA REVOCAR el auto de 18 de febrero de 2021 mediante el cual se negaron las excepciones previas formuladas por el señor GUSTAVO GIRALDO VICTORIA

Una vez en firme la presente providencia se fijará fecha para la realización de la audiencia inicial.

TERCERO: Este juzgado acatando el deber consagrado en el artículo 46 de ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 186 del CPACA, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

¹⁰ Artículo 318, Parágrafo, del CGP

✓ Radicación de tutelas y habeas corpus: URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ**

MAT

Firmado Por:

**PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ**

JUZGADO 001 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE CALI-VALLE DEL CAUCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ba30411dfee9333304595ed8279f05485a8bf9b47a000d79e8f22da6a9896de3**
Documento generado en 10/06/2021 03:30:04 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>